

*Pedimento del Procurador general de la Nacion.*

El Procurador general de la Nacion dice: que en la presente causa introducida en el juzgado de Distrito de Guanajuato contra Petra Mendoza por circulacion de moneda falsa, es preciso nombrar á dicho reo un defensor que la represente en la 3ª instancia.

En cuanto á la calificacion del delito, el juez de 1ª instancia no lo consideró probado, y por lo mismo absolvió del cargo á la reo; pero el tribunal de Circuito de Querétaro, estimando bastantes las pruebas rendidas, la condenó á cuatro meses de prision contados desde el 13 de Abril del presente año.

En opinion del que suscribe, el delito está probado; y la pena impuesta por el tribunal de Circuito es equitativa; por lo mismo y fundándose en las mismas leyes que dicho tribunal cita en su fallo, pide que este sea confirmado.

México, Setiembre once de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la causa seguida ante el juzgado de Distrito de Guanajuato y ante el tribunal de Circuito de Celaya contra Petra Mendoza por circulacion de moneda falsa; las diligencias practicadas y las sentencias que se pronunciaron en 1ª y 2ª instancia, lo pedido ante esta sala por el C. procurador general de la Nacion y todo lo demas que convino.

Considerando: que ya sea que se tenga á la Mendoza como circuladora del real falso con que segun Tiburcia Reyes y su hija María Dolores del mismo apellido y de once años de edad, compró á la segunda tla-

co de leche, ó ya como portadora de medio real falso que se le halló dentro de la boca, el delito se refiera á circulacion de una pequeña cantidad; usando de la facultad que concede la ley 8ª, tit. 21, part. 7ª, se declara, que se revoca la sentencia pronunciada por el tribunal de Circuito de Celaya y se da por compurgada á Petra Mendoza con la prision sufrida.

Devuélvanse las actuaciones de 1ª y de 2ª instancia al tribunal de Circuito de Celaya con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Octubre siete de mil ochocientos setenta y uno.—*F. Guzman.*

**AMPARO.**

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla de Zaragoza, por la Junta municipal del pueblo de San Bernabé Temoxtitlan, contra el C. gobernador del Estado que ha atacado la propiedad de los vecinos de dicho pueblo, violando el art. 27 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Las mas sábias y mejores instituciones políticas son inútiles é ineficaces cuando no encuentran fuera de sí un apoyo y una poderosa defensa que las ponga á cubierto de los ataques de la inobediencia por parte de

los particulares y de la abusiva autoridad de los agentes del poder público. A esta necesidad ha provisto en la república la no bastante elogiada ley que establece el recurso de amparo. Su alto fin, su noble objeto, es hacer efectivos los bienes que las leyes y la Constitución otorgan á los mexicanos, y cuidadosa con la misma solicitud de proteger el pacto federal como la soberanía de cada Estado, protege del mismo modo los derechos políticos de la asociación como la mezquina propiedad del mas humilde jornalero. Su objeto, pues, no es otro que contener á la autoridad en el estrecho círculo de sus facultades legales.

No teniendo éstas otro origen ni otro límite que el marcado por la ley, desde el momento que la infringe el representante de un poder público cualquiera, delinque en su doble personalidad de ciudadano y magistrado, y sus actos no pueden prevalecer ante la ley de amparo.

El gobernador de un Estado, simple ejecutor de las leyes, no tiene facultad alguna para dictarlas; y si por ignorancia ó malicia se atreve alguna vez á hacerlo, tal acto, no mereciendo otro nombre que el de abuso del poder, no puede subsistir, ni hay para repararlo otro recurso que el de la ley que protege las garantías individuales.

La división territorial política, es una atribución especial del poder legislativo, no solamente en la Constitución federal sino en todas las de los Estados: modificarla en cualquier sentido, no le es dado por consiguiente á otra autoridad, que á la depositaria del poder á cuyo cargo está la facultad de legislar.

Bajo este aspecto bastaría considerar la *suprema resolución* de seis de Julio, del C. Ignacio Romero Vargas, para otorgar el amparo á los que contra ella lo solicitan, pues semejante conducta importa á no dudarlo, una invasión en la esfera de la autoridad legislativa.

Me he detenido en presentar la cuestión bajo éste aspecto, para poner á la vista del

juzgado la gran trascendencia del caso presente, en que un gobernador contrariando la explícita voluntad de una legislatura, osa, despreciando esta, dictar por sí una disposición que importa un acto legislativo y ejecutarlo á reserva de que el congreso revise la ley dada por él, es decir, por el ejecutivo, pues á eso se ha reducido la conducta del C. gobernador.

Por lo demas, los quejosos, no cabe duda en que han fundando perfectamente su recurso, y sus sólidos y legales razonamientos ninguna alteración sufren en su valor y en su fuerza por las alegaciones presentadas por la autoridad contra quien se dirige la queja, en lo que debió ser informe justificado: y eso aun cuando se lo agreguen las apreciaciones que por vía de apéndice á aquel alegato, se han presentado bajo la firma del C. Palma.

Los derechos individuales no se pierden ni menoscaban por la asociación de los individuos, y ante el juzgado se han promovido ya recursos de este género, suscritos por mas de diez personas, sin que á nadie se le haya ocurrido que por esa circunstancia fueran improcedentes.

En la división del pueblo de San Bernabé, hecha por el C. gobernador, la propiedad ocupada no pertenece á cada vecino de una manera individual y exclusiva, pues se trata de bienes comunes en cuanto á su uso y aprovechamiento de sus productos. Si pues, literalmente se verifica que el vecindario ha sufrido una expropiación sobre ilegal ó injusta; si es cierto que cada uno de los moradores del pueblo ha podido entablar el recurso, no es menos cierto que bien y legalmente han podido todos colectivamente hacerlo.

Y bien se comprendo, que si se pusiera á cada individuo en la necesidad de entablar por sí solo el recurso de amparo, la resolución que á su favor obtuviera debía limitarse á él exclusivamente, segun el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1869; y acaso ante la perspectiva de los gastos de

un juicio, preferirían quedar despojados, pues que tal vez eso les costaba menos.

También sería una mala interpretación del artículo constitucional la que dijera, que no tiene aplicación cuando el objeto sobre que versara la expropiación era perteneciente á muchos. El artículo 27 protege la propiedad sea de la clase que fuere, pertenezca á uno ó á muchos; y lo mismo protege al dueño que al usufructuario; al que tiene un campo en enfiteusis, que al que tiene solo sobre él servidumbre.

Prescindiendo del estilo irrespetuoso del último escrito presentado por los solicitantes, el promotor fiscal lo encuentra tan perfectamente razonado, que no vacila en recomendar sus fundamentos, para que agregados á lo que lleva expuesto, pida á vd. declarar: que la justicia federal ampara á los vecinos del pueblo de San Bernabé contra la providencia del C. gobernador, de 6 de Julio último, por vulnerar los derechos que les otorga el artículo 27 de la Constitución federal.

Zaragoza, Setiembre cuatro de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Eugenio Sanchez.*

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Puebla, Setiembre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el síndico, el alcalde, y uno de los regidores del ayuntamiento del pueblo de S. Bernabé Temoxtitla contra el C. gobernador del Estado, por el hecho de haber prevenido al C. jefe político del Distrito de Cholula que procediese, acompañado de un agrimensor, á demarcar los linderos entre el expresado pueblo y el barrio de Santa Marta, para segregarlo y erigirlo en otro pueblo por tenerse hecha á la legislatura del Estado la iniciativa de ley, cuya determinación hubiera tenido efecto, no obstante la protesta que se hizo en el acto de

verificarse la dolineación, lo cual importa violación del artículo 27 de la Constitución en perjuicio de los hijos del pueblo que representan; el escrito de queja; el informe rendido por la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado por las partes; y cuanto mas que ha sido de verse y tenerse presente.

*Considerando:* que los quejosos se apoyan para solicitar el que la justicia federal los ampare, en que el C. gobernador del Estado Ignacio Romero Vargas, extralimitando sus facultades haya violado el art. 27 de la Constitución en perjuicio de los vecinos del pueblo porque gestionan, con haber dispuesto que se haga la demarcación de terrenos que debe corresponder á cada población, lo que constituye un verdadero despojo cuando aun no se sabe si el poder legislativo obsequiará la iniciativa de ley á fin de que el barrio de Santa Marta se erija en pueblo de Hidalgo. Que al deducir derechos las personas que lo han hecho con el carácter de miembros de un cuerpo municipal, es fuera de duda que su defensa se contrae directamente á favor del pueblo que representan, en virtud del perjuicio que le resulta con que se le prive de la parte de los terrenos que forman el barrio que le pertenece. Que á pesar de que los vecinos del pueblo resientan los perjuicios que cause la segregación porque se les impide el uso, esto no importa violación del art. 27 de la Constitución, ya porque el perjuicio solo pueden resentirlo mientras tanto permanezcan vecinos del lugar, como principalmente porque el precepto constitucional habla de la propiedad. Que según el tenor del art. 101 y 102 de la Constitución y del 1º y 2º de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 869, el amparo solo puede tener lugar respecto de individuos particulares agraviados, mas no es de hacerse extensivo á los pueblos; porque si por la razón de concederse á las personas, debiera otorgarse á los pueblos que se componen de estas, la misma razón habría al con-

cederse á aquellos para que disfrutaran de la gracia los Estados de quienes ha resueltose ya por la Suprema Corte en sentido adverso. Que si en virtud de las leyes de reforma los terrenos que eran del comun del pueblo han pasado á ser del dominio particular, ni ha acreditándose en que bienes consista la expropiacion, ni las personas que la hayan sufrido; pero aun en el caso de justificacion, seria de atenderse la solicitud una vez que la representacion del síndico, con arreglo á la ley, se limita á los intereses del municipio; no pudiendo en consecuencia favorecer ni perjudicar sus gestiones á los individuos particulares agraviados. Por cuyas consideraciones y con fundamento de las disposiciones citadas, *se declara:* que la justicia de la Union no ampara al síndico, alcalde y regidor que en representacion del pueblo de san Bernabé han promovido contra lo dispuesto por el C. gobernador, sobre que se hiciera la demarcacion de la línea que debe dividirle del barrio de Santa Marta para su ereccion en pueblo; y que en atencion á la imposibilidad que se advierte tienen las personas que han promovido el juicio para poder pagar ni aun el minimum de la multa que señala el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 869, se los releva de la pena. Hágase saber; compúlsense las copias para su publicacion en el periódico oficial y en el Semanario Judicial, y remítanse los autos á la Suprema Corte para su revision. El C. juez de Distrito definitivamente juzgando lo provoyó, mandó y firmó. Doy fé.

*Verdadero. Ante mí.—Antonio Gar-  
cía.*

*oria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

Setiembre veintiseis de mil ochocientos y uno.  
El juicio de amparo promovido  
juzgado de Distrito de Puebla de

de Distrito de Puebla de Zaragoza, que  
niega el amparo.

Segundo; se ampara á los vecinos del pueblo de S. Bernabé Temoxtitla contra la Orden de 6 de Junio último del gobierno del Estado de Puebla, sobre la ereccion en pueblo del barrio de Santa Marta, en cuanto por dicha disposicion se perjudiquen los derechos de los vecinos del pueblo de S. Bernabé Temoxtitla para la adjudicacion que debe hacérselos de los terrenos del fun-

Zaragoza, por la junta municipal del pueblo de S. Bernabé Temoxtitla contra el C. gobernador del Estado, quejándose de violacion del art. 27 de la Constitucion federal, por atacar la propiedad de los vecinos de Temoxtitla con la Orden relativa á que se erija en pueblo el barrio de Santa Marta, y considerando; que esta Orden, segun aparece en el expediente, se refiere á que el barrio de Santa Marta se erija en pueblo; á que se le tenga por segregado del pueblo de S. Bernabé Temoxtitla, y á que, para que esto se verifique, ocurra el jefe político de Cholula á fijar, con las formalidades necesarias, la línea divisora entre uno y otro pueblo; pero sin expresarse que la division sea para efectos puramente políticos ó administrativos, ó para que los vecinos del barrio de Santa Marta adquieran los terrenos en que se forme el nuevo pueblo: que si para llevar á efecto la division, ha de ser preciso privar á los vecinos de S. Bernabé Temoxtitla de una parte del fundo legal, esto atacaría la garantía á que se refiere el art. 27 de la Constitucion federal, puesto que dentro de ese fundo está el barrio de Santa Marta y puesto que conforme á las leyes de reforma, si los pueblos no pueden tener bienes raíces en comun, los terrenos que antes tenían como fundo legal deben dividirse entre individuos particulares: de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Constitucion federal se decreta:

Primero; que se revoca la sentencia pronunciada el 18 del presente por el juzgado

*Antonio I  
cía Mozq*

*Ejecu*

México  
cientos se  
Visto  
ante el ju

do legal, conforme á las leyes de desamortizacion; no estendiéndose el amparo á la ereccion del pueblo de Santa Marta, en cuanto á los efectos puramente políticos ó administrativos de la citada disposicion.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre primero de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por los reos Silvestre Romero y Abraham García, por creer que se violan en sus personas las garantías que otorgan los artículos 13, 19, 20, 21 y 23 de la Constitucion federal, con la determinacion de ser pasados por las armas como plagiarios del C. Francisco de Sales Vallejo.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Silvestre Romero y Abraham García, sentenciados por la gefatura política de este Departamento á la pena capital, por el crimen de plagio, con arreglo á la ley de 10 de Abril del año próximo anterior, han ocurrido á vd. solicitando que la justicia federal los

ampare contra la autoridad encargada de ejecutar la sentencia.

Los quejosos consideran el caso comprendido en la fraccion 1ª art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, y las garantías que en su opinion consideran violadas, son las que consigna nuestro pacto federal en sus artículos 13 parte 1ª, 19 parte 1ª, 20, 21 y 23, es á saber: aquellas mismas garantías que la ley de 10 de Abril que queda citada, y se les aplicó para juzgarlos, mandó suspender en perjuicio de los plagiarios y salteadores.

Como ya ese juzgado ha tenido á bien, en su auto de 27 del próximo pasado, suspender la ejecucion de los reos, que debió verificarse el dia siguiente, este ministerio fiscal no se ocupará ya de otro punto si no es de aquel que ha servido de fundamento á los quejosos para iniciar este recurso, y cuya fuerza aparente ha logrado inclinar el ánimo del juzgado á mandar suspender la ejecucion de la pena.

El dafio hecho á la sociedad debe ser la verdadera medida de los delitos: este principio que reconocen todos los criminalistas, así como la justa alarma en que se encuentra nuestra sociedad por la escandalosa repeticion del crimen de plagio, determinaron, sin duda, al supremo Gobierno á iniciar ante el congreso de la Union la ley de suspension de garantías para los salteadores y plagiarios, cuya ley ha estado vigente desde el 10 de Abril de 1869 hasta igual fecha del corriente año, en que ha dejado de producir sus efectos.

En esta última circunstancia fundan los peticionarios el derecho que creen que los asiste para no ser ejecutados; pues concluido el término fijado por la ley que les suspendió las garantías, por ese solo hecho han vuelto á recobrarlas, y acaso se consideren con el de volver á ser juzgados con arreglo á las leyes comunes.

El promotor suscrito, no niega de ningun modo que los reos de estos delitos han vuelto al goce de sus garantías; esta es una